

**Chillán, ocho de abril de dos mil veinticuatro.**

**V I S T O:**

En este proceso RUC 2210027280-K RIT 125–2023, el abogado de la Defensoría Regional del Ñuble don HUMBERTO SERRI GAJARDO, en representación de IGNACIO ALEXIS RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, dedujo recurso de nulidad en contra de la sentencia dictada por la Segunda Sala del Tribunal Oral en lo Penal de Chillán, el día 14 de febrero último, que condenó a este último a sufrir la pena de quinientos cuarenta y un días, de presidio menor en su grado medio, y a las penas accesorias de suspensión de cargo u oficio público durante el tiempo de la condena, en su calidad de autor del delito de conducción en estado de ebriedad con licencia de conducir cancelada, en grado de consumado, previsto y sancionado en los artículos 196, en relación con el inciso segundo del artículo 209, ambos de la Ley 18.290, perpetrado en la localidad de Campanario, comuna de Yungay, el día 04 de junio de 2022, la cual no le será sustituida en los términos de la Ley 18.216, debiendo cumplirla real y efectivamente, sin que tenga abonos que considerar, además se le condena a la cancelación de su licencia de conducir, oficiándose al efecto.

Contra dicho fallo el defensor penal, en representación del condenado, recurrió de nulidad en contra de la sentencia, interponiendo la causal contemplada en la letra b) del artículo 373 del Código Procesal Penal.

Concedido el recurso por el tribunal a quo, se elevaron copias del registro de audio y la carpeta que consigna la sentencia del juicio de que se trata.

La Corte lo declaró admisible, procediendo a conocerlo en la audiencia del día veinte de marzo último, llevándose a efecto la vista del recurso interviniendo los abogados de las partes, fijándose para la lectura del fallo el día de hoy, a las 10:00 horas.

**Oídos los intervinientes y considerando:**

1°.- Que, el abogado de la Defensoría Regional del Ñuble don HUMBERTO SERRI GAJARDO, en representación de IGNACIO ALEXIS RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, dedujo recurso de nulidad en contra de la sentencia, por la causal prevista en el artículo 373 letra b) del Código Procesal Penal, esto es, cuando, en el pronunciamiento de la sentencia, se hubiere hecho una errónea aplicación del derecho que hubiere influido sustancialmente en lo dispositivo del fallo, en relación con los artículos 196 inciso 1° y 209 inciso 2° de la Ley 18.290.



El recurrente después de transcribir los fundamentos Noveno, Décimo, Décimo Cuarto y Décimo Sexto y parte resolutive del fallo recurrido, afirma que se incurrió en dicha causal, en razón que se impuso a su defendido una condena de presidio menor en grado medio, atentando contra el principio pro reo, dado que la pena corporal asignada al delito de conducción en estado de ebriedad –según dispone el artículo 196 de la Ley N° 18.290–, es la de presidio menor en su grado mínimo y el aumento de la pena que señala el artículo 209, de acuerdo a lo que se entiende por “aumentar”, de conformidad al concepto definido por la RAE es “Dar mayor extensión, número o materia a algo” indicando como sinónimos: “acrecentar, agrandar, crecer, ampliar, ensanchar, sumar, adicionar, añadir, alargar.”

Por lo anterior añade, y referido a lo indicado en la norma legal (artículo 209), aumentar la pena en un grado debe interpretarse en el sentido de “dar mayor extensión”, es decir, ampliar –sumar, adicionar, añadir– el marco penal de un grado por sí solo a un marco penal compuesto de dos grados de una pena divisible, esto es, una pena que va desde presidio menor en su grado mínimo hasta el presidio menor en su grado medio y, no así, restringirla al presidio menor en su grado medio, tal como lo hicieron los sentenciadores en el considerando décimo cuarto.

Además, se debe tener en consideración el artículo 57 del Código Penal que indica que, “cada grado de una pena divisible, es una pena distinta” y no hay dudas que de acuerdo al artículo 209 de la ya citada Ley, el deber impositivo sea aumentar la pena establecida en la ley en “un grado”.

El letrado luego se refirió a lo que dispone el artículo 69 del Código Penal, en donde el legislador fija criterios que el juez debe considerar de manera imperativa al momento de imponer la pena en concreto, y estos son: a) Número y entidad de las circunstancias atenuantes y/o agravantes. b) Mayor o menor extensión del mal producido por el delito. Criterios que fueron considerados por los sentenciadores en la instancia correspondiente, quienes indican en el considerando décimo cuarto que: “(...) concurriendo una atenuante – 11 N°9 del Código Penal- y una agravante -12 N°16 del mismo cuerpo legal- de acuerdo al artículo 67 inciso 1° y 6°, el tribunal procederá a compensarlas racionalmente, pudiendo recorrerla en toda su extensión al aplicarla, imponiéndola en el mínimo, atendida la menor extensión del mal causado, de conformidad a lo previsto en el artículo 69 del Código Punitivo”.



Agrega enseguida que habiendo sido compensadas la atenuante y la agravante por parte del tribunal, y atendida la menor extensión del mal causado, se debió imponer la pena según lo dispuesto en el artículo 67 del Código Penal, en el mínimo del quantum de presidio menor en su grado mínimo, lo anterior, atendido a que no existen circunstancias o razones que justifiquen la imposición de una pena superior al *mínimum*.

Por otra parte afirmó que en el mismo sentido de su alegación se ha pronunciado la Corte de Talca en las causas Rol Nos. 26-2019 y 549-2020, reproduciendo los considerandos séptimo y quinto, respectivamente, en donde se acogieron los recursos de nulidad, estableciendo que se permite acceder a una pena de presidio menor en su grado mínimo, siendo plenamente aplicable la pena sustitutiva solicitada.

De otro lado concluyó que la errónea aplicación del aumento de grado conforme al artículo 209 de la ley de tránsito, trajo como consecuencia jurídica que el Tribunal al determinar la pena principal, si bien aplica correctamente el *mínimum* de la misma, lo hace sobre la base de un marco penal en abstracto erróneo, respecto del cual omite uno de sus grados, esto es, el de presidio menor en su grado mínimo, aplicando sólo el segundo de los mismos, cual es el de presidio menor en su grado medio; lo que en definitiva llevó a una pena en concreto de 541 días, cuando lo que correspondía -conforme a la extensión del mal causado definida por el sentenciador, aunada a un marco abstracto de dos grados- era una pena de 61 días; sustancialmente inferior a la impuesta, lo cual evidentemente causa en su defendido un perjuicio sólo reparable mediante la nulidad solicitada.

Termina solicitando se acoja el recurso, declarando nula la sentencia dictada en contra de su representado, sólo en la parte que impone una pena de 541 días de presidio menor en su grado medio, y en su lugar se sirva dictar, sin nueva audiencia, pero separadamente, una de reemplazo, a partir del correcto marco penal en abstracto, aplicándole una pena de 61 días de presidio menor en su grado mínimo, atendida la compensación gradual de agravantes y atenuantes, así como la extensión del mal causado fijada por el sentenciador; otorgando la pena sustitutiva que en derecho corresponda.

**2°.-** Que, el artículo 373, letra b) del Código Procesal Penal dispone que procederá la nulidad del juicio y de la sentencia cuando en el pronunciamiento de la sentencia se hubiere hecho una errónea aplicación del derecho que hubiere influido sustancialmente en lo dispositivo del fallo, y, como ya tradicionalmente se acepta, dicha situación puede producirse en el caso que exista una contravención



formal del texto de la ley, es decir, cuando el juzgador vulnera de manera palmaria y evidente, el texto legal; cuando se vulnera el verdadero sentido y alcance de una norma jurídica que sirvió de base y fundamento para la dictación de una sentencia, esto es, en el evento de producirse un errónea interpretación de la norma, y cuando existe una falsa aplicación de la ley, situación que se verifica cuando el juzgador deja de aplicar una norma jurídica, cuando resulta realmente pertinente su aplicación, o no la aplica cuando debe hacerlo.

**3°.-** Que, el recurrente funda su recurso en que el tribunal no habría hecho una correcta aplicación del derecho en relación al monto de la pena, conforme al aumento que prescribe el artículo 209 de la Ley 18.290.

**4°.-** Que, al revisar el fallo recurrido, los jueces en el considerando DÉCIMO CUARTO respecto a la penalidad del ilícito, en la parte pertinente, establecieron lo siguiente: “El artículo 196 inciso 1° de la ley 18.290, sanciona a quien condujere en estado de ebriedad, sea que cause o no daño alguno, con la pena de presidio menor en su grado mínimo. Ahora bien, el artículo 209 inciso 2° del mismo cuerpo legal, señala que, si quien cometiere el delito contemplado en el artículo 196, lo hiciere con su licencia de conducir cancelada, el tribunal deberá aumentar la pena en un grado. Afectando entonces al encartado la mencionada circunstancia prevista en el artículo 209 inciso 2°, le corresponderá, en abstracto, la pena de presidio menor en su grado medio. En forma relacionada, concurriendo una atenuante – 11 N°9 del Código Penal- y una agravante -12 N°16 del mismo cuerpo legal- de acuerdo al artículo 67 inciso 1° y 6°, el tribunal procederá a compensarlas racionalmente, pudiendo recorrerla en toda su extensión al aplicarla, imponiéndola en el mínimo, atendida la menor extensión del mal causado, de conformidad a lo previsto en el artículo 69 del Código Punitivo...”.

**5°.-** Que, en nuestro orden jurídico, se debe señalar que las normas se crean para ser aplicadas, y la interpretación que hace el recurrente, deja sin aplicación o sin efecto lo previsto en el inciso 2° del artículo 209 de la Ley de Tránsito. En efecto, dicho artículo expresa en el inciso aludido: “Si los delitos a que se refieren los artículos 193 y 196 de la presente ley, fueren cometidos por quien no haya obtenido licencia de conducir, o que, teniéndola, hubiese sido cancelada o suspendida, el tribunal deberá aumentar la pena en un grado”; por lo que, según las normas de interpretación, establecidas en el Código Civil, se debe aplicar su tenor literal, y, más allá de cualquier definición del concepto aumentar, resulta claro y asociada a la lógica y sentido común, que la norma original, se aumenta en un grado.



Así las cosas, la norma aplicada y sobre la cual se aplica el aumento, es la del artículo 196 de la citada Ley de Tránsito que, en lo pertinente, señala, “El que infrinja la prohibición establecida en el inciso segundo del artículo 110, cuando la conducción, operación o desempeño fueren ejecutados en estado de ebriedad, o bajo la influencia de sustancias estupefacientes o sicotrópicas, será sancionado con la pena de presidio menor en su grado mínimo y multa de dos a diez unidades tributarias mensuales, además de la suspensión de la licencia para conducir vehículos motorizados por el término de dos años...”; por lo tanto, la única posibilidad de darle aplicación a dicho artículo es, como lo hizo el tribunal.

6°.- Que, en consecuencia, habiéndose impuesto al encartado Ignacio Alexis Rodríguez Rodríguez, la pena de 541 días de presidio menor en su grado medio, más las accesorias correspondientes al tipo penal de que se trata, esto es, en el tramo mínimo estatuido por el legislador para estas situaciones, no se advierte infracción legal alguna y, por ende, la sentencia en estudio no adolece de una errónea aplicación del derecho, razón por la cual el recurso de nulidad promovido al efecto debe necesariamente ser rechazado.

Por estos razonamientos y de conformidad a lo dispuesto, además, en los artículos 352, 372, 373 letra b) y 384 del Código Procesal Penal, **se rechaza**, sin costas, el recurso de nulidad interpuesto por el abogado de la Defensoría Regional del Ñuble don Humberto Serri Gajardo, en representación de Ignacio Alexis Rodríguez Rodríguez, en contra de la sentencia definitiva de catorce de febrero último, dictada por la Segunda Sala del Tribunal Oral en lo Penal de Chillán, en la causa RUC 2210027280-K RIT 125–2023, la que, en consecuencia, no es nula.

Atento lo dispuesto en el artículo 37 de la Ley N°18.216, remítase al Tribunal Oral de esta ciudad, la carpeta de antecedentes, una vez ejecutoriada la presente sentencia, para que éste conceda la apelación deducida en forma subsidiaria, interpuesta en el otrosí del escrito de la defensa, elevándolos a esta Corte en su oportunidad a fin de conocer el recurso pendiente.

Regístrese, dese lectura en esta audiencia, agréguese el fallo a la carpeta de antecedentes, la que se devolverá al tribunal de origen junto con los registros audibles.

Redacción del Ministro Claudio Arias Córdova.

No firma la ministra señora Gallardo, no obstante haber concurrido a la vista de la causa y al acuerdo, por encontrarse ausente haciendo uso de feriado legal.

**Rol N° 138-2024- PENAL.-**



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: FXBMXZSSXX



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: FXBMXMZSSXX

Pronunciado por la Primera Sala de la C.A. de Chillan integrada por Ministro Presidente Claudio Patricio Arias C. y Abogado Integrante Juan Pablo Ortega A. Chillan, ocho de abril de dos mil veinticuatro.

En Chillan, a ocho de abril de dos mil veinticuatro, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: FXBMXMZSSXX